



CONSEJO NACIONAL
PARA LA IGUALDAD
DE DISCAPACIDADES



Ministerio
del Interior



Ministerio
de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos



PROTOCOLOS PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Presentación

El interés del CONADIS no es solo fomentar el acceso a la justicia desde el ámbito institucional, sino también el trabajo hacia las personas con discapacidad y sus familias, logrando tener una orientación clara cuando sus derechos han sido vulnerados, y así poder tener un acercamiento con las diferentes instancias donde deben ser atendidas sus necesidades con efectividad y afectividad, dando la priorización en su atención.

El acceso a la justicia es vital para todos los ciudadanos, pero en el caso de las personas con discapacidad muchas veces los casos de discriminación han provocado graves situaciones en las cuáles se debe precautelar el respeto de sus derechos y su defensa, sin ser discriminados por su condición.

Agradecemos a todas las instituciones con sus autoridades y delegados para que este instrumento llegue a todos los ciudadanos que puedan hacer uso del mismo de manera ética y honesta.

El CONADIS siempre estará pendiente de las necesidades de las personas con discapacidades y de fomentar una información clara, precisa y accesible.

Xavier Torres
PRESIDENTE DEL CONADIS

Presentación

PROTOCOLOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los Protocolos para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, han sido elaboradas en virtud del “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades”, suscrito el 17 de agosto de 2017; el mismo que tiene por objeto coordinar, garantizar y desarrollar en conjunto la promoción, protección, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador.

Este documento se ha construido a la luz de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, la Constitución del República del Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento. Tienen como objeto garantizar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, para que conozcan y exijan sus derechos.

Están estructuradas en base al siguiente contenido:

1. Cuándo los derechos de la personas con discapacidad son vulnerados;
2. Los servicios del sistema de justicia, mediante los cuales se garantiza la protección y el ejercicio de sus derechos; y
3. Los derechos y vulneraciones más frecuentes por materia como son: salud; educación; accesibilidad y movilidad; materia penal y familiar; y, protección social.

Estos Protocolos constituyen un mecanismo para generar la posibilidad real de toda persona independientemente de su condición o situación personal, de hacer uso del sistema de justicia para evitar que se desconozcan sus derechos y puedan ser víctimas de diversas formas de discriminación.

La igualdad de acceso al servicio de justicia es una obligación del Estado y una convicción del Consejo de la Judicatura. Felicitamos al CONADIS y ratificamos nuestro compromiso de un trabajo coordinado en favor de las personas con discapacidad.

Gustavo Jalkh Röben
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

AUTORIDADES

Xavier Torres Correa – Presidente Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS
Dr. Gustavo Jalkh Röben – Presidente Consejo de la Judicatura
Dra. Rosana Alvarado Carrión – Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Dr. César Navas Vera – Ministro del Interior
Dr. Ramiro Rivadeneira Silva – Defensor del Pueblo
Dr. Ernesto Pazmiño Granizo – Defensor Público
Dr. Carlos Ramírez Romero – Presidente de la Corte Nacional de Justicia
Dr. Fernando Sempértegui – Rector de la Universidad Central del Ecuador

DELEGADOS INSTITUCIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

Dr. Giovanni Rivadeneira Guijarro – Universidad Central del Ecuador
Dra. Artemisa Gutiérrez – Consejo de la Judicatura
Ab. Johana Paola Fabara Dávila – Consejo de la Judicatura
Ab. Gema Lisbeth Chavarría García - CONADIS
Ab. Alex David Guashpa Gómez – Ministerio de Justicia
Ab. Gissela Cristina Paredes – Ministerio del Interior
Ab. Alexis Dimitri Ponce Bustillos – Defensoría Pública
Ab. Rodrigo Fernando Varela Torres – Defensoría del Pueblo
Ab. Sebastián Bernardo Vázquez Rodas – Corte Nacional de Justicia

REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS

Dr. Giovanni Rivadeneira Guijarro – Universidad Central del Ecuador

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Fernando Betancourt – CONADIS
Santiago Chiluisa – CONADIS

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	15
Información sobre la discapacidad	17
Definición de Discapacidad	17
Tipos de Discapacidad	17
MARCO JURÍDICO IMPORTANTE SOBRE LA DISCAPACIDAD	20
Constitución de la República	20
Instrumentos Internacionales	21
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU)	22
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacidad	22
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA)	22
100 Reglas de Brasilia	23
La normativa jurídica a nivel nacional	23
Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (2014)	23
Ley Orgánica de Discapacidades (2012)	24
ENTIDADES U ÓRGANOS DE DERECHO PÚBLICO QUE PRESTAN SERVICIOS DE ACCESO A LA JUSTICIA	27
Defensoría del Pueblo	27
Órganos Jurisdiccionales de la Función Judicial establecidos en la ley	28
Cortes Provinciales de Justicia	29

Corte Nacional de Justicia	29
Corte Constitucional	30
Órganos Auxiliares	31
Servicio Notarial	31
Centros de Mediación / Proceso alternativo de solución de conflictos	33
Defensoría Pública	34
Fiscalía General del Estado	35
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos	35
Junta Cantonal de Protección de Derechos	36
Policía Nacional	37
Dirección Nacional de Policía Comunitaria-POLCO	37
Departamento de Violencia Intrafamiliar -DEVIF	37
Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes- DINAPEN	37
Departamento de Policía Judicial –PJ	38
LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES	38
Identificación de barreras	39
Accesibilidad y ajustes razonables	39
Aspectos relativos a la capacidad jurídica	40
Aspectos conexos a la comunicación y la información en el proceso judicial	42
Acompañamiento de una persona de apoyo en el proceso judicial	42
Condiciones de vulnerabilidad y atención prioritaria en el proceso judicial	43

Duración de las actuaciones judiciales	43
Aspectos referentes a la protección de la intimidad	44
Testimonio, declaración o interrogatorio de la persona con discapacidad	44
Aspectos relativos a la persona con discapacidad como víctima o testigo	45
Pericias a personas con discapacidad	46
INFORMACIÓN DE DERECHOS POR MATERIAS.....	47
DERECHOS HUMANOS	47
DERECHOS EN MATERIA CONSTITUCIONAL	49
Garantías Jurisdiccionales	50
Acción de Protección	51
Acción de Habeas Corpus	53
Acción de Acceso a la Información Pública	55
Acción de Habeas Data	56
Acción por incumplimiento	56
Recurso Extraordinario de Protección	58
Amicus Curiae	60
DERECHOS EN MATERIA CIVIL.....	60
DERECHOS EN MATERIA DE FAMILIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	62
Patria potestad	63
Tenencia	63
Derechos de Alimentos	63

Visitas	64
DERECHOS EN MATERIA LABORAL	65
Derecho a la No Discriminación	67
Derecho a La Seguridad Social	67
Afiliación General Ordinaria y Voluntaria	68
Jubilación	68
Montepío	71
DERECHOS EN MATERIA TRIBUTARIA, DE LAS TARIFAS PREFERENCIALES, EXENCIONES	
ARANCELARIAS Y DEL REGIMEN TRIBUTARIO	72
Exoneraciones tributarias	73
DERECHOS EN MATERIA PENAL	73
Como infractor la persona tendrá las siguientes garantías	73
Delitos contra las personas	75
DERECHOS EN MATERIA DE TRÁNSITO	86
Contravenciones	86
DERECHOS DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO, AL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO	88
DERECHOS EN MATERIA DE LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	88
DERECHOS EN MATERIA DE SALUD	89
DERECHOS A LA EDUCACIÓN	91
BIBLIOGRAFÍA	93

INTRODUCCIÓN

El presente documento es una recopilación e identificación de ciertas normas y procedimientos que hacen referencia a los derechos de personas con discapacidad en diferentes materias y como acceder a los órganos de justicia cuando esos derechos han sido violentados, ignorados o inadecuadamente aplicados, causando perjuicios a las personas con discapacidad.

El objetivo principal de este instrumento, es poner a disposición de la sociedad un documento que permita una visión general de derechos de personas con discapacidad y qué hacer, cuando existen posibles vulneraciones, exponiendo en resumen práctico como acceder a jueces, tribunales, defensores públicos, fiscales y Defensoría del Pueblo, para que esos derechos sean reivindicados y respetados en favor de la persona con discapacidad.

El brindar información y encaminar a las personas con discapacidad, a un efectivo acceso a la justicia, conforme la Constitución de la República y las demás leyes dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, es un deber de los órganos que conformamos el Estado y estamos inmersos en el sistema de administración pública, desde las competencias y atribuciones de cada entidad estatal.

El derecho al acceso a la justicia, es inherente e irrenunciable de todas las personas, y el Ecuador como un Estado constitucional democrático y de derechos, garantiza y debe buscar implementar medidas efectivas para el cabal acceso a la justicia.

Con el transcurrir de los años, se han ido reconociendo derechos e implementando medidas necesarias para que estos derechos sean aplicables a personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria en casos de doble vulnerabilidad. Este nuevo avance permite reconocer a las personas con discapacidad como personas dignas y

que por sobre todo merecen respeto sin importar sus deficiencias ya sean físicas, psicológicas, intelectuales o sensoriales. Es decir, a estas personas es la sociedad quien les impide e impone barreras, obstaculizando su participación plena y efectiva en igualdad de derechos que los demás.

En el caso de las personas con discapacidad sus derechos se ven afectados por falta de conocimiento sobre cómo acceder a la justicia, y reclamar lo que conforme a las leyes se haya vulnerado o no haya sido reconocido por la colectividad.

Es por eso que, es un deber de todas las personas y especialmente del Estado comprender, conocer y respetar los derechos de las personas con discapacidad. Además, el Estado deberá garantizar el efectivo cumplimiento de estos derechos y garantías, implementando políticas públicas y medidas de acción afirmativa, para tutelar y garantizar su aplicación dentro de todo ámbito.

Constituyéndose este protocolo en herramienta de gran utilidad para generalizar conocimientos sobre el acceso a servicios de justicia por parte de las personas con discapacidad y sus familias

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD

Definición de Discapacidad

La Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), en su artículo 6 define a la discapacidad como “toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria”.

Para sensibilizarnos y comprender a la discapacidad, es necesario conocer los principios generales sobre personas con discapacidad, según la “Convención sobre los derechos de la personas con discapacidad”, aceptados y reconocidos en un orden formal por los países parte de la Naciones Unidas y que se lo resumen en lo siguiente:

La persona con discapacidad, tiene derecho a que se respete su dignidad, autonomía, independencia, libertad de tomar decisiones propias, sin discriminación. Siendo obligación de la sociedad aceptar sus capacidades y diferencias, permitiéndoles la participación e inclusión efectiva en la convivencia e interacción social, dándoles igualdad de oportunidades y accesibilidad, siendo trascendente el derecho a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.

Tipos de Discapacidad

El proceso de la determinación de los tipos de discapacidad de una persona responde a los criterios establecidos en el Sub-Sistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad vigente, y que está determinado para la evaluación y calificación que realizan los equipos profesionales calificadores de la discapacidad (conformados por un médico, un psicólogo y un trabajador social), debidamente capacitados y autorizados para evaluar los aspectos biológicos, psicológicos y del contexto socioeconómico, a fin de determinar los tipos, grados y porcentajes de discapacidad correspondientes.

La calificación de la discapacidad para determinar su tipo, grados y porcentaje se efectuará a petición de la o el interesado, de la persona que la represente o de las personas o entidades que estén a su cargo; la que será voluntaria, personalizada y gratuita.

El Subsistema de Calificación de la Discapacidad establecido por el Ministerio de Salud Pública reconoce la existencia de las discapacidades físicas, intelectuales, mentales (psicosociales) y sensoriales comprendidas en discapacidad visual, auditiva y de lenguaje. De manera general, las personas suelen tener un solo tipo de discapacidad, sin embargo existe la posibilidad de que una persona pueda presentar simultáneamente dos o más tipos de discapacidad. Los grados de discapacidad son los siguientes:

Discapacidad visual

Ceguera y baja visión aún con ayudas y correcciones (lentes)

Discapacidad Auditiva

Personas que presentan gran dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), de ambos oídos

Discapacidad de Lenguaje

Deficiencia para la comunicación verbal, causada por alteraciones, anomalías, perturbaciones, o trastornos del lenguaje que dificultan, de manera más o menos persistente la comunicación lingüística

Discapacidad Física

Deficiencias corporales / Visibles.
Ejemplo: Amputaciones

Viscerales / No Visibles.
Ejemplo: Insuficiencia Renal

Discapacidad Intelectual

Dificultad para comprender ideas complejas, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y desenvolverse en la vida diaria, lo cual influye en sus relaciones interpersonales y esto le convierte en persona influenciable.

Grados:

Discapacidad Intelectual Límite
(Limitrofe, fronterizo)

Discapacidad Intelectual Leve;
Discapacidad Intelectual Moderada;
Discapacidad Intelectual Grave y/o Profunda

Discapacidad Mental

Secuelas de una enfermedad mental, que se caracteriza por trastornos previsiblemente permanentes en el comportamiento adaptativo que afectan el estado de bienestar, interfiriendo la habilidad de una persona para afrontar las demandas ordinarias de la vida

MARCO JURÍDICO IMPORTANTE SOBRE LA DISCAPACIDAD



Constitución de la República

La Constitución de la República del Ecuador en su Título III, referente a las garantías constitucionales, las mismas que se dividen en: normativas, de políticas públicas y jurisdiccionales, son vías mediante las cuales el Estado cumple sus obligaciones, frente al respeto, a la vulneración y la garantía de los derechos, además que debe investigar, sancionar y reparar, cuando uno de los derechos se haya visto afectado, ya sea por acción u omisión de los administradores de justicia, o de las personas en general.

Los derechos de las personas con discapacidad están consagrados en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, al ser reconocidos como un Grupo de Atención Prioritaria, es decir como un grupo que requiere del Estado una atención especial por encontrarse en una situación de desigualdad por su condición, en especial si se trata de:

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”.

En la sección sexta del tercer capítulo, referente a personas con discapacidad, la Constitución se enfoca especialmente en las personas con discapacidad, fundamentalmente el Art 47 en el que se manifiesta que el Estado garantizará las políticas de prevención de las discapacidades e implementará la ayuda necesaria con la equiparación

de oportunidades para la integración social de las personas con discapacidad. Se reconocen varios valores como: atención especializada en entidades públicas y privadas, rehabilitación integral y asistencia permanente, rebajas en los servicios públicos, exenciones tributarias, viviendas dignas con facilidad de acceso y condiciones necesarias, una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración en igualdad de condiciones y de igual manera que sea especializada en el caso de personas con discapacidad intelectual, atención psicológica y gratuita tanto a las personas con discapacidad como a sus familiares, acceso a todos los bienes y servicios así como también a medios y formas alternativas de comunicación.

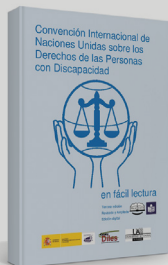
Por otro lado, de conformidad con el Art. 75, el Estado reconoce y garantiza el acceso libre y gratuito a la justicia y a la tutela efectiva de los derechos, manifestando que en ningún caso quedarán en indefensión, cumpliendo con todos los principios y garantías a la debida defensa ya sea víctima o una persona procesada.

Instrumentos Internacionales

Los Instrumentos Internacionales tienen prevalencia dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, una vez que el Ecuador, haya suscrito o ratificado; ya sean acuerdos, tratados, convenios o pactos, estos pueden ser multilaterales (varios países) o bilaterales (dos países); y hayan sido ratificados y promulgados en el Registro Oficial ecuatoriano, ya que este es el único mecanismo de que tome el carácter de norma y sea obligatoria para todos.

El acceso a la justicia está estipulado en varios instrumentos internacionales como un derecho irrenunciable e inherente de las personas. La Declaración Internacional de los Derechos Humanos manifiesta que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los juzgados y los tribunales nacionales competentes, estos deberán amparar contra todos los actos que violen los derechos fundamentales, los cuales están reconocidos por la Constitución y la ley.

El Estado deberá cumplir con el acceso a la justicia; además cabe señalar que no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad y brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso y que este sea rápido y eficaz.



Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU)

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, es un instrumento de derechos humanos vigente, que tiene como finalidad proteger los derechos de este grupo de atención prioritaria, el cual fue suscrito por nuestro país el 30 de marzo de 2007 y ratificado en el año 2008.

En el Art. 12 se establecen las obligaciones de los Estados para el reconocimiento de las personas con discapacidad como persona ante la ley, es decir se analiza la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; el Art. 13 se desprenden importantes compromisos por parte de los Estados, para implementar medidas razonables a los procedimientos para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en todas las etapas y procesos judiciales, además de promover la capacitación del personal de administración de justicia.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacidad

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue firmado por Ecuador el 30 de marzo de 2007 y ratificado en el año 2008. Es el acuerdo de los Estados parte en el que se reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para recibir y considerar la comunicaciones presentadas por las personas o grupos con discapacidad o personas que representen a estos, sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de las disposiciones de la convención.

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA)

Por otro lado, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada por el Ecuador en el 2004, prioriza el compromiso de los Estados parte,

para eliminar progresivamente la discriminación contra las personas con discapacidad y promover su integración en varias áreas entre estas el acceso a la justicia y los servicios policiales.

100 Reglas de Brasilia

Las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, tienen como finalidad y propósito el ser conocidas, desarrolladas y puestas en práctica o ejecutadas por funcionarios judiciales, fiscales, defensores, es decir por todos los operadores de justicia, principalmente quienes deben interiorizar con vocación de servicio el derecho humano a una tutela judicial efectiva de una persona, ya sea como procesado o como víctima, cuando sus derechos sean vulnerados en lo civil, penal, laboral, administrativo o en cualquier otra rama del derecho, como actor o demandado.

La Normativa Jurídica a nivel nacional

Las leyes ecuatorianas, se desarrollan en base a lo que se manifiesta en la Constitución de la República y en su artículo primero se menciona que el Ecuador es un estado de derechos y justicia, dentro de cada materia ya sea civil, laboral, penal o muchas otras del ordenamiento jurídico, se busca cumplir con los derechos reconocidos por la Constitución dentro de cada ámbito, para el mejor ejercicio de las garantías constitucionales, especialmente las jurisdiccionales que tienen que ver con la aplicación directa de los derechos para los Ecuatorianos y las personas extranjeras que vivan en los territorios nacionales, especialmente para las personas y grupos de atención prioritaria, aplicando los principios correspondientes en cada caso para una tutela efectiva en derechos.

Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (2014)

La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad se creó con la finalidad de establecer la igualdad, la equidad, el paralelismo, el equilibrio entre la colectividad y los grupos que sufren mayor transgresión en derechos y discriminación social; sustentando lo que establece la Constitución de la Republica en donde se manifiesta que son órganos para asegurar la plena

vigencia de los derechos constitucionales y derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. Estos Consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, relacionadas con las temáticas y facultades que maneja cada uno como son de Género, Pueblos y Nacionalidades, Generacionales, de Discapacidades y Movilidad Humana.

Competencias del Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades (CONADIS)

El CONADIS es un organismo de Derecho Público, con personería jurídica, y autonomía financiera, administrativa, técnica y operativa, perteneciente a la Función Ejecutiva. Está encargado de cumplir con las funciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de la política pública en materia de discapacidades de conformidad con el 156 del la Constitución de la República del Ecuador, así como “asegurar la plena vigencia y la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos

Ley Orgánica de Discapacidades (2012)



La Ley Orgánica de Discapacidades establece los principios fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, así como también en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador. Estos principios son los siguientes: no discriminación, igualdad de oportunidades, participación e inclusión, responsabilidad social colectiva, celeridad y eficacia dentro de cualquier procedimiento judicial, accesibilidad, interculturalidad, atención prioritaria, protección de niñas, niños y adolescentes y el principio de aplicación más favorable de la norma legal en caso de duda o *In dubio pro hominem*.

La Ley obliga al Estado a través de los diferentes organismos y entidades a cumplir con los derechos, principios y garantías reconocidos en la Constitución y en las demás leyes y tratados internacionales, también dispone a los servidores públicos, administrativos y judiciales que apliquen directa y efectivamente la ley.

Dispone que se eliminen las barreras físicas, que dificultan el normal desenvolvimiento dentro de la ciudad, como el acceso a lugares públicos y/o privados que ofrezcan servicios. Además esta norma también dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD`S deberán dictar ordenanzas respectivas para que en toda obra pública rural o urbana, se provean medios de acceso y circulación para las personas con discapacidad, además de instalaciones adecuadas para garantizar la accesibilidad.

El Estado también garantizará los medios necesarios para que las personas tengan el acceso a la comunicación, esto también abre el camino para el acceso a la justicia, es por esto que se fomentará y promocionará los diferentes medios para la comunicación tales como: el lenguaje de señas, el sistema braille, ayudas técnicas y tecnológicas, mecanismos, medios y formatos alternativos para la comunicación. En el Art. 65 también se dispone que las instituciones públicas y privadas que brinden servicios públicos creen portales para de esta manera brindar información y ayuda a las personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria.

Sistema nacional de protección integral de las personas con discapacidad.

Un “sistema”, es una serie de funciones que operan en armonía y conjuntamente, implementándose entre sí, con un mismo propósito, siguiendo varios pasos, para conseguir un resultado.

Entonces el Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad busca articular a los diferentes organismos del Estado, para juntos garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el Artículo 88 de la Ley Orgánica de Discapacidades, organismos y funciones, clasificados en tres niveles.

- El primero es el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS), encargado de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas implementadas por las funciones del Estado y las instituciones de los sectores público y privado, para la plena vigencia y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Constitución de la República, los tratados, instrumentos internacionales y la ley; todo esto en función de la planificación establecida en la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (ANID) 2017- 2021.

- El segundo es la Defensoría del Pueblo y órganos de la Administración de Justicia, encargados de la protección, defensa y exigibilidad de derechos; y,
- El tercer y último nivel tiene que ver con los Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, tales como autoridades nacionales y gobiernos autónomos descentralizados competentes en diferentes ámbitos y, entidades públicas y privadas de atención para personas con discapacidad.

ENTIDADES U ÓRGANOS DE DERECHO PÚBLICO QUE PRESTAN SERVICIOS DE ACCESO A LA JUSTICIA



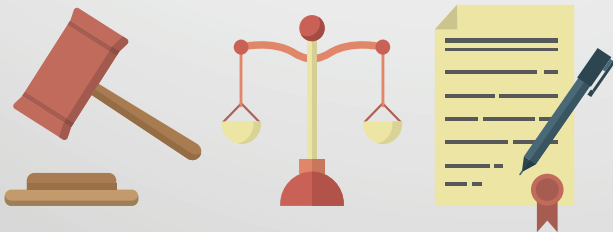
Defensoría del Pueblo

Las competencias de la Defensoría del Pueblo conforme lo establece el Artículo 2 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, son:

- a) Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data y de Amparo de las personas que lo requieran;
- b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen.

En el caso de que exista vulneración de derechos de las personas con discapacidad, la entidad competente será la Defensoría del Pueblo encargada de la protección y tutela de los derechos de los ecuatorianos y las ecuatorianas.

Órganos de Administración de Justicia



La Función Judicial para la Administración de Justicia se compone de órganos jurisdiccionales; administrativos; auxiliares y autónomos. Los órganos jurisdiccionales son los encargados de administrar justicia y son los siguientes: la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de justicia, los Tribunales y Juzgados que establezca la ley y los Juzgados de paz.



Órganos Jurisdiccionales de la Función Judicial establecidos en la ley

Los órganos jurisdiccionales están conformados por jueces y tribunales de justicia quienes ejercen funciones, para resolver asuntos sometidos a su consideración observando la Constitución, la ley e instrumentos internacionales. Los jueces son quienes juzgan y hacen ejecutar lo juzgado.

Los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial se dividirán por materias, y se encuentran ubicados en el territorio nacional, dependiendo del número de habitantes de cada cantón.

Para acceder a un juez siempre será a través de una demanda en materia civil o denuncia en materia penal.

A continuación se detalla una lista de las diferentes unidades judiciales divididas por materia a nivel nacional:

1. Tribunales Distritales de lo contencioso administrativo (juicios relacionados a la administración pública, conflictos con el Estado y sus instituciones públicas).
2. Tribunales Distritales de lo contencioso tributario (juicios relacionados con el cobro de impuestos y tributos).
3. Tribunales de garantías penales (juicios relacionados con actos que afecten a tal grado el derecho que se convierten en delitos sancionados por la ley como son, ser víctima de muerte, de violación, la agresión física, agresión sexual, agresión psicológica, el robo, hurto, la discriminación, estafa, abuso de confianza, entre otros.)
4. Unidades Judiciales de violencia contra la mujer y la familia (juicios relacionados con los hechos y actos de violencia y las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar, como son los golpes o lesiones físicas menores, recurrentes o no).
5. Unidades Judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia (juicios relacionados con reconocimientos de paternidad, fijación de pensiones alimenticias y otros).

6. Unidades Judiciales del trabajo (juicios relacionados con temas laborales como despido intempestivo, visto bueno, desahucio, pago de haberes, etc.).
7. Unidades Judiciales de lo civil y mercantil (juicios relacionados con patrimonio, incumplimiento de contratos, desacuerdo en negocios o relaciones mercantiles, desacuerdo en adquisición o repartición de bienes, o ejecución de derechos sobre bienes muebles e inmuebles, etc.).
8. Unidades Judiciales de inquilinato y relaciones vecinales (juicios relacionados con trámites de arrendamiento).
9. Unidades Judiciales únicos o multicompetentes (en el caso de que hayan pocos habitantes dentro de un Cantón, los jueces están facultados para conocer los casos que corresponden a varias materias Ej. Un Juez conoce un caso sobre reivindicación que es materia civil y también conoce uno sobre pago de haberes laborales que es materia laboral)



Cortes Provinciales de Justicia

A las Salas de Corte Provincial le corresponde conocer los casos de apelación de las resoluciones o sentencias emitidos por los jueces de la primera instancia, la apelación puede ser presentada en la misma audiencia de forma oral, o en los 10 días posteriores de haber recibido la notificación, de manera escrita y debidamente fundamentada.

En cada provincia funcionará una Corte Provincial de justicia integrada por el número de juezas y jueces necesarios para atender las causas, se organizarán en salas especializadas en las materias que correspondan. El Consejo de la Judicatura determina el número de tribunales necesarios, conforme a las necesidades de la población.

Corte Nacional de Justicia

La Corte Nacional de Justicia es un órgano de relevancia constitucional, tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede estará en Quito.”

La norma básica que regla la actuación de la Corte Nacional de Justicia, a más de la Constitución de la República, es el Código Orgánico de la Función Judicial, la cual contiene la regulación de las funciones, organización, estructura, principios; y, formas de acceso a la condición de Juez y Conjuez Nacional.

La Corte Nacional de Justicia ejerce sus funciones enfocadas al interés en: a).- Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley, b).- Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentando en los fallos de triple reiteración; c) Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero; y d).- Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia.

El recurso de casación procede contra sentencias o autos que pongan fin al proceso, dictadas por Corte provincial o por Tribunales Contencioso Administrativos, igual procede sobre providencias de estos tribunales expedidas en fase de ejecución de sentencias, si resuelve puntos esenciales no controvertidos en el proceso, ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado.

Los casos en que puede darse la casación están descritos en el Código Orgánico General de Procesos y se resumen en: aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales; de normas jurídicas, precedentes jurisprudenciales obligatorios; o de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de prueba que condujo a una mala o no aplicación del derecho sustantivo. Procede también cuando la sentencia no tenga requisitos exigidos por la ley, cuando en la sentencia se ha concedido más allá de lo demandado, o se ha omitido resolver algún punto demandado.

Corte Constitucional

La Corte Constitucional garantiza la vigencia y la supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales. Su función es interpretar, controlar y administrar la justicia constitucional.

Entre las funciones de la Corte Constitucional se resalta: a) Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su

revisión. b) Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. c) Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven los mandatos constitucionales. La Corte Constitucional ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito.

La Corte Constitucional conocerá los recursos de Acción por Incumplimiento (cuando no se cumple con la sentencia emitida y que fue ejecutoriada, es decir que no se interpuso ningún otro recurso) y la Acción Extraordinaria de Protección (Protege derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se haya violado derechos constitucionales, por acción u omisión.)



Órganos Auxiliares

Los órganos auxiliares de la administración de justicia, brindan un servicio extra a la justicia, además del servicio notarial, podemos encontrar a los martilladores judiciales que realizan los remates de los bienes y a los depositarios judiciales quienes cautelán y administran los bienes que están dentro de un proceso judicial, hasta que este se resuelva.

Servicio Notarial

El servicio notarial es otorgado por un notario, que es nombrado por el Consejo de la Judicatura, a través de un concurso de méritos. Los notarios tienen ámbito de trabajo o acción a nivel cantonal, a esto se denomina, jurisdicción del notario a nivel cantonal, están distribuidos a nivel nacional y sus facultades las limita la Ley. Para poder acceder a los Servicios Notariales, la persona deberá acudir en el horario de atención de las notarías, de 08:00 a 17:00, de lunes a viernes. Antes de contratar los servicios, pida una cotización y solicite toda la información. Siempre pida una factura. Este es el único comprobante de respaldo.

Las personas con discapacidad tienen GRATUIDAD en el pago de las tarifas notariales.

Las funciones del notario es dar fe de que se han realizado ciertos actos, decisiones o situaciones que él ha visto y ha constatado, la ley le faculta sus actuaciones delimitándolas entre otras a lo siguiente:

- Receptar personalmente, interpretar y dar forma legal a la exteriorización de voluntad de quienes requieren su ministerio.
- Dar certificación de un documento original que le sea presentado.
- Da razón de que las firmas puestas ante él en documentos son legítimas y pertenecen a la persona que dice firmar. Ante él se firman contratos, que se elevan a escritura pública, es de uso común en compra o venta de bienes inmuebles como casas, terrenos.
- Ante el notario se puede otorgar un testamento. Proceder a la apertura y publicación de testamentos cerrados. Ante el notario se puede dar la declaración juramentada de quienes se creyeren con derecho a la sucesión de una persona difunta. Solemniza la partición de bienes hereditarios mediante la declaración de las partes.
- El notario solemniza la designación de administrador común, mediante la declaración de las partes, lo que se legalizará con la correspondiente petición y reconocimiento de la firma de los solicitantes.
- El notario notificará, a petición de parte, la revocatoria de mandato o poder.

El notario además puede:

- Autorizar la venta en remate voluntario de bienes raíces de personas menores que tengan la libre administración de sus bienes.
- Tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, únicamente en los casos en que no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia según lo previsto en la Ley.
- Tramitar la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad conyugal.

- Solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia de la unión de hecho.
- Autorizar la emancipación voluntaria del hijo adulto.
- Solemnizar la unión de hecho. Autorizar la petición de disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes por mutuo acuerdo.
- Protocolizar las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, poderes especiales, revocatorias de poder que los comerciantes otorgan a sus factores y dependientes para administrar negocios.
- Tramitar la petición de declaratoria de interdicción para administrar los bienes de una persona declarada reo por sentencia ejecutoriada penal.
- Declarar la extinción de usufructo, uso y habitación, por muerte del usufructuario usuario o habitador; por llegada del día o cumplimiento de la condición prefijados para su terminación; por renuncia del usufructuario usuario o habitador.
- Notificaciones de traspaso o cesiones de derechos o créditos personales.
- Receptar la declaración juramentada sobre estado civil de las personas cuando estas lo requieran, con el objetivo de tramitar la posesión notoria del estado civil.
- Tramitar la caución e inventario en el usufructo, para determinar que ésta sea suficiente para la conservación y restitución del bien que se trate y para el inventario solemne.
- Solemnizar el desahucio, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Inquilinato y el Código Civil.
- Inscribir contratos de arrendamiento

Centros de Mediación / Proceso alternativo de solución de conflictos



La mediación es a lo que se le conoce como un modo extrajudicial de arreglar o solucionar un conflicto, se caracteriza por que conlleva a un acuerdo, entre ambas partes fomentando una cultura de paz.

Casos a aplicarse en mediación: Se aplica en materias transigibles como son aquellos casos donde hay concesiones o renuncias mutuas en beneficio de ambas partes, sin que altere o lesione la buena costumbre, la ley, la libertad de acción y decisión, siempre debe ser un acuerdo que de beneficios y satisfacción; no puede haber perjuicios de ninguna naturaleza. En cualquier lapso del proceso judicial una de las partes puede solicitar la mediación

Existen centros de mediación propios del Consejo de la Judicatura, centros de mediación de algunas instituciones que están acreditados por el Consejo de la Judicatura y estos pertenecen a instituciones independientes públicas o privadas a nivel nacional. Para poder conocer cuáles son estos Centros de Mediación es necesario revisar la página de Consejo de la Judicatura www.funcionjudicial.gob.ec , en el área de servicios dar clic en mediación y seguidamente dar clic en Centros de Mediación aprobados por el Pleno. Ahí se desplegarán inmediatamente los centros de mediación tanto los del Consejo de la Judicatura como los de las demás instituciones públicas o privadas.

Defensoría Pública



La Defensoría Pública patrocina la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos, especialmente de las personas que se encuentran en los grupos de atención prioritaria, cuando la persona que necesita de la defensa de algún derecho, no tiene los recursos económicos suficientes para pagar un abogado privado. Esta Institución tiene a disposición de todas las personas, consultorios jurídicos gratuitos de los que podemos conocer su dirección visitando la página de la Defensoría Pública o directamente visitando el siguiente link:

<http://www.defensoria.gob.ec/index.php/component/k2/item/109-directorio-cj>.

La Defensoría Pública atiende casos de movilidad humana y refugio, legalización de tierras no invadidas, inquilinato, demandas de alimento, violencia intrafamiliar, derechos laborales, mediación y ciertos casos penales a personas privadas de libertad que se encuentren en estado de indefensión o por su condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.

Los defensores públicos atienden los casos relacionados con delitos de acción pública, tales como: plagio, robo, hurto, estafa, trata de personas, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, violación, asesinato, homicidio, delitos de tránsito, etc.



Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado es una Institución autónoma de la Función Judicial, las funciones están contempladas en el artículo 195, el cual menciona lo siguiente:” La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos



El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tiene como Misión “Velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de los derechos humanos”. En ese sentido, ofrece servicios accesibles a la personas con discapacidad para prevenir la violencia y atenderlas cuando sus derechos han sido vulnerados, a saber:

La Dirección de Respuesta Judicial dentro de sus atribuciones y responsabilidades es competente para realizar el monitoreo y seguimiento judicial de procesos penales conforme el artículo 15, apartado, 2.1.3.2 del Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

La Dirección de Relación con la Ciudadanía, a través de la Unidad de Atención a la Ciudadanía brinda asesoría legal, psicológica y de trabajo sobre diferentes ámbitos de preocupación de la población, enmarcados en el principio de no discriminación. Este servicio, logra articular a los ciudadanos con otras instituciones estatales (unidades judiciales, fiscales, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, entre otras) y particulares para que puedan satisfacer sus derechos. Por otra parte, mediante el Servicio Especializado de Protección Especial se brinda atención psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia; los profesionales de este servicio trabajan con el enfoque de discapacidad para lograr la prevención de los derechos vulnerados de este grupo. Actualmente este servicio, recibe solicitudes de atención de Juntas Cantonales de Protección, Unidades Fiscales y Judiciales, principalmente.

Junta Cantonal de Protección de Derechos

Las Juntas Cantonales realizan la protección en casos de amenaza o violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y otros grupos de atención prioritaria, para que se dispongan medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado.

Para esto la Junta Cantonal de Protección de Derechos realizará las siguientes funciones:

- Denunciar infracciones administrativas y penales.
- Vigilar la ejecución de las medidas administrativas interpuestas.
- Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en el caso de incumplimiento de las decisiones administrativas.

- Requerir de los servidores públicos de la administración central y seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de las funciones.
- Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra de las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria.



Policía Nacional

La Policía Nacional es la entidad encargada de brindar seguridad pública a todos los habitantes del Ecuador y está regulada por el Ministerio del Interior del Ecuador. La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional y la convivencia pacífica.



Dirección Nacional de Policía Comunitaria-POLCO

Es una modalidad de servicio de la Policía Nacional creado para construir una cultura de convivencia pacífica y seguridad ciudadana en el barrio, mediante acciones de carácter preventivo, proactivo y educativo con la finalidad de fomentar la participación solidaria, cívica y patriótica de las autoridades, organizaciones sociales y de la comunidad.

POLICÍA COMUNITARIA



Departamento de Violencia Intrafamiliar -DEVIF

Unidad policial que garantiza el respeto de los derechos de las familias, brindando atención especializada en los casos de violencia intrafamiliar, protegiendo la integridad física, psíquica y sexual de los miembros del núcleo familiar.



Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes- DINAPEN

Unidad policial que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Constitución de la República y en los Convenios Nacionales e Internacionales, con el establecimiento de medidas preventivas, de intervención y de capacitación.



Departamento de Policía Judicial –PJ

La Policía Judicial realizará la investigación de los delitos de acción pública de instancia oficial y de instancia particular, bajo la dirección jurídica y de la Fiscalía a fin de reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES

¿Cuándo una persona con discapacidad puede estar inmersa en un proceso judicial?

Los procesos judiciales tiene lugar en las sedes judiciales denominadas Unidades judiciales, tribunales y Cortes; pero para llegar a estas instancias, previamente debe haber un conflicto o inconformidad con algún asunto o circunstancia que tiene lugar en el entorno y vida diaria de la persona con discapacidad, que está afectando un derecho, generando problemas, molestias o impedimentos para alguna situación. Cuando una persona va a formar parte de un proceso judicial, debe contar con un abogado que lo patrocine.

La estructura del sistema de la Función Judicial ecuatoriana, prevé los servicios de defensores públicos, que otorgan patrocinio en procesos judiciales de manera gratuita especificando los temas sobre los cuales prestan sus servicios, este

patrocinio por parte del defensor público, permite que los ciudadanos tengan un acceso oportuno a los servicios de justicia, ya que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos contar con el apoyo de un abogado dentro de cualquier proceso.

La persona con discapacidad puede ser parte de un proceso judicial en las siguientes situaciones:

1. Cuando la persona con discapacidad afecta o es afectada en un derecho
2. Cuando la persona con discapacidad es víctima o comete un delito.

En estas situaciones la legislación ecuatoriana, protege a la persona con discapacidad en iguales condiciones que a otra persona de la sociedad, y con ciertas acciones preferenciales, para equiparar las limitaciones que pudiese ocasionar la discapacidad en relación a la otra persona que interviene en el proceso.

Identificación de barreras

La identificación de barreras para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad es indispensable, ya que esto sirve como punto de partida para la elaboración de medidas o programas que permitan superar las mismas y asegurar a las personas con discapacidad el acceso efectivo a la justicia de forma directa o indirecta y de acuerdo a su situación física, sensorial, psicosocial o intelectual, para esto se requiere adoptar todas las medidas legales, arquitectónicas y comunicacionales posibles.

Accesibilidad y ajustes razonables

Los servidores judiciales deberán garantizar a toda persona con discapacidad que participe en procesos judiciales, las condiciones necesarias para que pueda hacerlo plenamente, asegurando su derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Esto implica atender aspectos tan importantes como el modo en que se proporciona la información, las características del entorno, la manera en que se promueve la comunicación y todos aquellos otros aspectos que contribuyan a la identificación y eliminación de obstáculos y barreras.

Así, siguiendo estos lineamientos, debe promoverse la eliminación o reducción de las barreras que restrinjan o impidan su participación plena y efectiva en cualquier acto judicial, disponiendo de todas las medidas y recursos necesarios para garantizar su dignidad, movilidad, comunicación, seguridad, confianza y comodidad.

Para ello, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- a) Se podrá solicitar la colaboración de los profesionales especializados de las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social o de cualquier otra índole que el Poder Judicial u otras instituciones pongan a su disposición, según sea el caso.
- b) En cualquier actuación judicial, se debe implementar los ajustes razonables necesarios para que la persona con discapacidad pueda acceder al sistema judicial en las mismas condiciones que las otras personas como ejemplo la cámara de Gessell y las salas de audiencias.

Las audiencias, se deberán desarrollar en un ambiente acogedor, dispuesto con el objetivo de reducir los niveles de ansiedad, con espacios acondicionados para evitar la coincidencia de la víctima o testigo, con el procesado o demandado, según el tipo de proceso.

Se informará previamente a la persona respecto a la forma en la cual se va a acondicionar el lugar, y el fin que se pretende con las diferentes adaptaciones como las cámaras de Gessell, instrumentos u otros espacios que favorezcan su bienestar en cualquier momento del proceso.

Aspectos relativos a la capacidad jurídica

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en los artículos 12 y 13 señala que los Estados partes reafirman el reconocimiento de la personalidad jurídica como un derecho de las personas con discapacidad, capacidad jurídica que se ejercerá en igualdad de condiciones con las demás personas, en todos los aspectos de la vida.

Los estados deben adoptar medidas que permitan el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, respetando sus derechos, y voluntad,

Los estados deben asegurar el acceso a una justicia independiente es decir libre de influencias; y, una justicia en la cual las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes de procedimientos adecuados a la edad, como participantes directos o indirectos en los procedimientos judiciales.

En los casos puntuales en los que intervienen personas con discapacidad para acceder a sus derechos, pasaran por el análisis de la capacidad jurídica cuando se presuma o evidencie discapacidad psicosocial (mental), intelectual o incluso sensorial específicamente auditiva, cuando no se puede dar a entender por escrito o lengua de señas. Por lo tanto, es fundamental la posición de los jueces en determinar la capacidad jurídica de las personas que participan en el proceso.

En el Manual de atención en derechos a las personas con discapacidad de la Función judicial, emitido en el año 2015; se recoge el mandato de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de una manera didáctica e imperativa, expresando lo siguiente



“Las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás, en todos los aspectos de su vida. Por ello, los funcionarios de la Función Judicial les deberán facilitar su legítima comparecencia y actuación en calidad de partes, testigos u otras intervenciones, según sea el caso.”

Aspectos conexos a la comunicación y la información en el proceso judicial

Durante todas las etapas del proceso judicial, la persona con discapacidad deberá recibir información por parte de su abogado y de las autoridades competentes, la cual tendrá que adecuarse a su caso concreto, respetando su diversidad. Por tal razón, el lenguaje empleado deberá ser claro, sencillo y concreto, teniendo en cuenta sus características culturales, socioeconómicas o de cualquier otra índole.

La información que se brinde a la persona, deberá contar por lo menos con los siguientes contenidos:

- a) La naturaleza de la actuación judicial en la que la persona va a participar.
- b) El papel dentro de dicha actuación, sus derechos y su posición procesal, ya sea como víctima, testigo o procesado.
- c) El objetivo de su intervención.

Acompañamiento de una persona de apoyo en el proceso judicial

De requerirlo, toda persona con discapacidad podrá ser acompañada a lo largo del proceso judicial por una persona de su confianza (familiar, amigo o cualquier otra persona con la que tenga una relación afectiva o que conozca su condición y pueda facilitar su participación en la actuación judicial).



La función de la persona de apoyo consiste en brindar el apoyo afectivo y/o emocional que pueda requerir la persona con discapacidad en la actuación judicial, sin intervenir de ninguna forma en los procedimientos que se lleven a cabo.

Los funcionarios judiciales informarán de este derecho, desde el primer momento de interacción con la persona con discapacidad; y en el caso en el cual la persona con discapacidad no cuente con una persona de apoyo, se le informará sobre las alternativas correspondientes, incluida la posibilidad de estar acompañado durante la actuación judicial por un profesional del Departamento de Psicología o Trabajo Social de la Función Judicial.

Condiciones de vulnerabilidad y atención prioritaria en el proceso judicial

Los funcionarios judiciales deben recordar que las personas correspondientes a grupos de atención prioritarios enfrentan dificultades y obstáculos mayores para la defensa de sus derechos ante la justicia. Por esta razón, se deberá prestar atención especial a aquellas situaciones en las que varias condiciones de vulnerabilidad coloquen en una posición de desventaja a la persona frente al efectivo acceso del proceso judicial. Cuando se trate de personas con discapacidad víctimas o testigos, se deben adoptar medidas necesarias para garantizar la efectiva protección de sus derechos y, evitar riesgos de revictimización (víctimas en delitos de delincuencia organizada, personas menores de edad víctimas de delitos sexuales o mujeres víctimas de violencia, entre otras).

Duración de las actuaciones judiciales

En las actuaciones judiciales donde participen personas con discapacidad, se podrán adoptar las medidas necesarias para que los tiempos se ajusten al interés superior de las mismas, con el fin de evitar situaciones de alteración, tensión o angustia.

- Se procurará que la primera declaración testimonial que se reciba sea la suya, con el objetivo de no aumentar la tensión y angustia que la espera puede generarle.
- Para evitar revictimización no se señalarán las declaraciones de modo que coincidan a la misma hora, la persona con discapacidad víctima y el procesado.
- Es aconsejable evitar actos judiciales innecesarios, de tal manera que la persona solo comparezca cuando resulte estrictamente necesario, conforme con la normativa vigente.
- Se intentará la concentración, en el mismo día, de la práctica de las diversas actuaciones en las que deba participar, en observancia del debido proceso y los principios procesales, velando por que su declaración se efectúe únicamente cuando sea realmente preciso recabar información específica o adicional, evitando agotar una actuación de manera rutinaria.

Aspectos referentes a la protección de la intimidad

Se resguardará, en todo momento, la privacidad de toda persona con discapacidad que participe en cualquier actuación o diligencia, y que pueda sufrir afectación psicológica o grave perjuicio debido a la interacción con el sistema judicial. Por lo cual, se deberá adoptar las medidas necesarias para que esta persona pueda participar privadamente y con garantías, en dicha actuación.

En tales casos, las únicas personas presentes en la actuación judicial, serán solamente las que por ley u obligación deban estarlo. Además, podrá prohibir la captura o difusión de imágenes, fotográficas o vídeos que puedan afectar la dignidad de la persona con discapacidad.

Testimonio, declaración o interrogatorio de la persona con discapacidad.



El testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias del cometimiento de la infracción penal.

La prueba y los elementos de convicción, obtenidos mediante declaración, se registrarán por las siguientes reglas:

1. El testimonio se valorará en el contexto de toda la declaración rendida y en relación con las otras pruebas que sean presentadas.
2. El juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de las personas gravemente enfermas o físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer en la audiencia de juicio. En el caso de audiencia fallida, y en los que se demuestre la imposibilidad de los testigos de comparecer a un nuevo señalamiento, el tribunal podrá receptar el testimonio anticipado bajo los principios de inmediación y contradicción conforme la normativa vigente.

3. Las niñas, niños y adolescentes declararán sin juramento, pero con la presencia de sus representantes y su curador ad-litem que será nombrado y posesionado en la misma audiencia de juicio.
4. Si la persona que declara es sorda, el juzgador recibirá el testimonio por escrito o a través de una interpretación de lengua de señas de parte de un intérprete certificado o de una persona de su confianza que pueda interpretarla, a quien se le posesionará, en el mismo acto.
5. Las personas que sean llamadas a declarar y que se encuentren en situación de riesgo, tendrán derecho al resguardo proporcionado por el fiscal, a través del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos o el respaldo de la Policía Nacional, a fin de que se garantice su integridad personal y su testimonio.
6. El testimonio se practicará en la audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia, con excepción de los testimonios anticipados.



Las niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, tendrán derecho a que su comparecencia ante el juzgador o fiscal, corresponda a su situación y madurez biopsicosocial alcanzada. Para el cumplimiento de este derecho, se utilizarán elementos técnicos, como: circuitos cerrados de televisión, videoconferencia o similares, por una sola vez y se incorporará la grabación de la declaración en la audiencia de juicio, como prueba.

Aspectos relativos a la persona con discapacidad como víctima o testigo

Los datos que se le otorguen a las personas con discapacidad víctimas del delito, deberán contener información sobre:

- a) El lugar y modo como se presenta la denuncia o acción.

- b) El curso que se le da a esa denuncia o acción.
- c) Las posibilidades de obtener reparación del daño sufrido.
- d) Las fases relevantes del proceso.
- e) Todas las decisiones judiciales que puedan afectar tantos sus bienes jurídicos, su seguridad y su libertad.
- f) La resolución que dicta el juez o tribunal.

Pericias a personas con discapacidad

En las valoraciones corporales de personas con discapacidad víctimas de delitos sexuales, las autoridades judiciales deberán asegurarse de practicarlas en un ambiente cálido y de confianza, que ayude a disminuir la ansiedad o tensión, evitando situaciones que puedan revictimizar. En estas valoraciones, se deberá contar con la presencia de una persona de apoyo o familiar, siempre que la persona con discapacidad así lo requiera o sea evidente esa necesidad de acompañamiento.

Es importante señalar que para cualquier pericia médica, siempre se deberá contar con el consentimiento informado de la persona con discapacidad, sin importar la condición en que se encuentre.

INFORMACIÓN DE DERECHOS POR MATERIAS

Todos los derechos que se enunciaran en este capítulo, pueden llegar a ser reclamados en sede judicial, ya que la insatisfacción o no reconocimiento de un derecho, da la oportunidad de que sea reclamado por la persona afectada, ante un juez, con el patrocinio y asesoramiento de un abogado. La atención de la Función Judicial, es activada o impulsada por el requerimiento de la persona que siente le han afectado en un derecho causando insatisfacción y necesidad de reclamar ante un juez, que resuelva su situación.

Las personas con discapacidad al igual que otras personas de la sociedad, para saber cuándo pueden estar afectadas, lesionadas o perjudicadas en una situación de su vida diaria, deben al menos tener un conocimiento general sobre sus derechos, siendo el objetivo de este capítulo, dar a conocer alguno de ellos.

Dada la conformación de nuestro sistema de la Función Judicial los juzgados y tribunales se dividen por materias para tratar los asuntos que les correspondan. Entre los derechos y materias a describir se ha identificado los siguientes: Derechos Humanos, derechos en materia constitucional, civil, familia, mujer y adolescencia, laboral, tributario, penal, tránsito, accesibilidad al medio físico, al transporte público y privado, de defensa del consumidor, salud y educación.



DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; consta de 30 artículos.

Para información, identificamos y resumimos los derechos humanos a seguir:

- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente unos con otros.

- Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. No estará sometido a servidumbre o esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. No estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles o inhumanos o degradantes.
- Todos son iguales ante la ley sin distinción tienen derecho a igual protección de la Ley, e igual protección contra toda discriminación.
- Todos tiene derecho acceder a tribunales que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la Ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Todos tienen derecho a ser escuchados públicamente y con justicia con un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia y a garantizar su defensa en un juicio público.
- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional, tampoco se aplicará pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada.
- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, todos tienen derecho a formar una familia y al matrimonio. Toda persona tiene derecho a la propiedad, nadie será arbitrariamente privado de su propiedad.
- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todos tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión. Nadie será obligado a permanecer en una asociación.

- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Todos tienen derecho en igualdad de condiciones a las funciones públicas de su país.
- Todos tienen derecho a una seguridad social, al trabajo, al salario por su trabajo, al descanso y vacaciones libres y pagadas.
- Todos tienen derecho a una vida con salud y bienestar. La maternidad e infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
- Todos tienen derecho a una educación gratuita al menos a la instrucción elemental. Todos tienen derecho a tomar parte de la vida cultural de la comunidad.
- Toda persona tiene derecho, pero también obligaciones de respetar los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática. Esos derechos y libertades no podrán, en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

DERECHOS EN MATERIA CONSTITUCIONAL



Las personas con discapacidad son parte del grupo de atención prioritaria, son iguales y gozaran de los mismos derechos y oportunidades, nadie debe discriminarlos, menoscabar o anular sus derechos, tiene derecho a una vida libre de violencia, al acceso y uso de todas las formas de comunicación, visual, auditiva, sensorial y otras que permitan su inclusión e interacción con los demás en un ambiente amigable.

Entre otros derechos constitucionales que se resalta están:

- Atención especializada en entidades públicas y privadas.

- En materia de salud tiene derecho a una rehabilitación y asistencia permanente que incluye ayudas técnicas.
- Rebajas en los precios de los servicios públicos.
- Exenciones tributarias
- A trabajar con oportunidades que fomenten su capacidad y potencialidad.
- A una vivienda adecuada.
- A una educación donde los establecimientos tanto físicamente como curricularmente permitan una inclusión plena al aprendizaje.
- En materia procesal ante los jueces y tribunales del país, tienen derecho, a ser escuchados en igualdad de condiciones y en el momento oportuno, a presumir su inocencia, a contar con el apoyo de un abogado, presentar pruebas y argumentos que permitan una defensa, a que los jueces sean independientes e imparciales, a que las resoluciones que se tomen a su favor o en su contra sean motivadas, sustentadas, explicadas y justificadas en derecho.

Garantías Jurisdiccionales

Para garantizar el ejercicio de estos derechos constitucionales la legislación ecuatoriana prevé las garantías jurisdiccionales que activan la actuación de los jueces constitucionales, las garantías jurisdiccionales son definidas en la Constitución y tienen procedimientos propios según la clasificación determinada en la Ley, describiéndolos brevemente a continuación.

Las garantías jurisdiccionales tiene como finalidad la reparación eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución, o en instrumentos internacionales de derechos humanos. También está entre su fines, la declaración de la violación de uno o varios derechos y la reparación integral de los daños causados por su violación.

La acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, se regulan de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

¿Sabías que?

Estas acciones constitucionales pueden ser presentadas sin necesidad de patrocinio de un abogado

Acción de Protección



La Acción de Protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, sea por incumplimiento o por extraordinaria de protección.

En la acción de protección puede reclamar el cumplimiento de derechos constitucionales como son:

Derecho a que cuando sea inculpado de alguna situación le den la oportunidad de presentar ante un juez o autoridad administrativa argumentos de defensa, a que le acompañe un abogado de confianza, a que le permitan conocer las razones por las cuáles estas siendo inculpado de un hecho, a que le traten de acuerdo a sus necesidades por la discapacidad que posee, como es el contar con personas especializadas si es sordo, o no puede hablar o escribir, o padece alguna enfermedad o discapacidad que no le permita movilizarse, expresar o comprender en igualdad de situaciones que los demás, esto es parte del llamado “derecho al debido proceso”.

Otros ejemplos de derechos que puede reclamar en la acción de protección es que no le han permitido tener acceso a la vivienda, educación, a la salud, a la libertad de expresión, a la libertad de circulación e interacción en cualquier espacio público.

Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Violación de un derecho constitucional;
2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular.
3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.

Procedencia.- La acción de protección procede contra:

1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole, menoscabe, disminuya o anule un derecho, su goce o ejercicio.
2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución.
3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías de la Constitución.
4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:
 - a) Presten servicios públicos impropios o de interés público;
 - b) Presten servicios públicos por delegación o concesión;



- c) Provoque daño grave;
 - d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.
5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.

La acción de protección procede a favor de las personas con discapacidad, por ejemplo:

1. **Salud:** Falta de atención médica o insumos médicos.
2. **Educación:** Negativa al acceso educación.



La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o

motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia;

2. No ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional;
3. No ser desaparecida forzosamente;

Acción de Habeas Corpus

Cualquier persona, tiene derecho a:

1. No ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, la protección incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y

4. No ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante;
5. En caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad;
6. No ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;
7. La inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez;
8. La inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión;
9. No ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana;
10. Ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no luego de las veinticuatro horas siguientes a su detención.

Trámite.- La acción de hábeas corpus, seguirá el siguiente trámite:

1. La acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma la persona está privada de libertad. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se presentará ante el juez del domicilio del accionante. Si la orden de privación de libertad ha sido dispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia.”
2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la acción, el juez realizará la audiencia, en la que se deberán presentar las justificaciones de hecho y de derecho que sustentan la medida privativa de libertad.

3. El juez dictará sentencia en la audiencia y, dentro de las veinticuatro horas después de finalizada, notificará la resolución por escrito a las partes.
4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a las garantías jurisdiccionales: cuando la privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, se apelará ante el Presidente de la Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva.

La acción de habeas corpus procede a favor de las personas con discapacidad, por ejemplo:

1. Cuando una persona con discapacidad es privada de la libertad sin orden judicial legalmente emitida (boleta de apremio o boleta de detención emitida por un juez); o, sin parte policial en caso de delito flagrante.

Acción de Acceso a la Información Pública

Esta acción tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública, cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, cuando se creyere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada o cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de información. También procederá la acción, cuando la negación de información se sustente en el carácter secreto o reservado de la misma.

Se considerará información pública toda aquella que emane o que esté en poder de entidades del sector público o entidades privadas que, tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste.

No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas. No obstante, si la información no consta en el archivo de la institución solicitada, la entidad pública deberá comunicar el lugar o archivo donde se encuentra la información solicitada.



Acción de Hábeas Data

La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico.

El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de datos, el acceso sin costo a la información referida, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. No podrá solicitarse la eliminación de datos personales que por disposición de la ley deban mantenerse en archivos públicos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales únicamente podrán difundir la información archivada con autorización del titular o de la ley. Estas disposiciones son aplicables a los casos de rectificación a los que están obligados los medios de comunicación, de conformidad con la Constitución.

Acción por Incumplimiento

La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos.

Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe, cuyo cumplimiento se persigue, contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible.

Reclamo previo.- Con el propósito de que se configure el incumplimiento, la persona accionante previamente reclamará el cumplimiento de la obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento o la autoridad pública o persona particular no contesta el reclamo en el término de cuarenta días, se considerará configurado el incumplimiento.

Demanda.- La demanda deberá contener:

1. Nombre completo de la persona accionante.
2. Determinación de la norma, sentencia o informe del que se solicita su cumplimiento, con señalamiento de la obligación clara, expresa y exigible que se requiere cumplir.
3. Identificación de la persona, natural o jurídica, pública o privada de quien se exige el cumplimiento.
4. Prueba del reclamo previo.
5. Declaración de no haber presentado otra demanda en contra de las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión.
6. Lugar en el que se ha de notificar a la persona requerida.

Procedimiento.- Se deberá presentar la demanda a la Corte Constitucional, la sala de admisiones lo admitirá o inadmitirá conforme lo establecido en la ley.

En caso de considerar admisible la demanda, inmediatamente se designará mediante sorteo al juez ponente, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, se notificará a la persona accionada para que cumpla o justifique el incumplimiento en una audiencia que se realizará en el término de dos días ante el juez ponente.

En la audiencia, la persona a la que se demanda, comparecerá, contestará y presentará las pruebas y justificativos que considere pertinentes. En caso de que existan hechos que deban justificarse, se podrá abrir el término de prueba por ocho días tras los cuales se dictará sentencia.

Si la persona accionada no comparece a la audiencia o si no existen hechos que deban justificarse, se elaborará el proyecto de sentencia y el Pleno dictará sentencia en el término de dos días tras la celebración de la audiencia.



Recurso Extraordinario de Protección

La acción extraordinaria de protección, se presenta en la Corte Constitucional y tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.

La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial.

Término para accionar.- El término máximo para la interposición de la acción será de veinte días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes fueron parte; y, para quienes debieron serlo, el término correrá desde que tuvieron conocimiento de la providencia.

Requisitos.- La demanda deberá contener:

1. La calidad en la que comparece la persona accionante.
2. Constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada.
3. Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que sean ineficaces o inadecuados o que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional vulnerado.
4. Señalamiento de la judicatura, sala o tribunal del que emana la decisión violatoria del derecho constitucional.

5. Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial.
6. Si la violación ocurrió durante el proceso, la indicación del momento en que se alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa.

Admisión.- La acción extraordinaria será presentada ante la sala o tribunal que dictó la decisión definitiva; éste ordenará notificar a la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término máximo de cinco días.

La sala de admisión en el término de diez días deberá verificar:

1. Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso;
2. Que el recurrente justifique argumentadamente, la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión;
3. Que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia.



El fundamento de la acción no debe sustentarse en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley; no debe referirse a la apreciación de la prueba por parte del juez. Pues, si declara la inadmisibilidad, archivará la causa y devolverá el expediente a la jueza, juez o tribunal que dictó la providencia y dicha declaración no será susceptible de apelación; si la declara admisible se procederá al sorteo para designar a la jueza o juez ponente, quien sin más trámite elaborará y remitirá el proyecto de sentencia, al pleno para su conocimiento y decisión.

Sentencia.- La Corte Constitucional determinará si en la sentencia se han violado derechos constitucionales del accionante y si declara la violación, ordenará la reparación integral al afectado.

La Corte Constitucional tendrá el término máximo de treinta días contados desde la recepción del expediente para resolver la acción.

Amicus Curiae

Esta es una figura jurídica que tiene muchos años de existencia sus orígenes son en el derecho Romano, y se ha constituido una fortaleza importante dentro de los procesos donde se defiende derechos humanos y de grupos vulnerables, especialmente en tribunales internacionales, como son la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de derechos humanos, la Corte Europea de derechos Humanos.

Amicus Curiae quiere decir, “Amigo de la corte o amigo de tribunal”, es la opinión jurídica voluntaria de un tercero, que puede ayudar a esclarecer criterios.

El Amicus Curiae; y, su permisión de que terceros ajenos al proceso judicial intervengan en el proceso, garantiza una vigilancia y puede ayudar a dar agilidad a la resolución, de alguna manera garantizando transparencia en el proceso. Se la puede ejercer ante la autoridad judicial donde se desarrolle la causa.

DERECHOS EN MATERIA CIVIL

En materia civil, los derechos de las personas con discapacidad están en igualdad de condiciones de cualquier persona, sin distinción ni exclusión.

Entre los derechos que podríamos resaltar como información general están los siguientes:

- Derechos a realizar todas las acciones que no sean prohibidas por ley

- Derecho a la filiación, o sea, a ser reconocido por su padre y madre. A ejercer patria potestad sobre sus hijos, a dar y recibir alimentos.
- Derecho al matrimonio, a la unión libre, a su disolución,
- Derecho a adquirir bienes, a venderlos, a realizar cualquier transacción o decisión sobre bienes y servicios, su uso, goce y disposición. En general derecho a suscribir contratos no prohibidos por la Ley.
- Tienen derecho a administrar sus bienes, a decidir sobre ellos, a heredar o a dejar herencia.

Es muy importante saber que existen figuras legales, para representar a personas con discapacidad que no puedan ejercer su capacidad jurídica, y estas figuras son la tutoría y curaduría.

Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o madre, que puedan darles la protección debida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y generalmente guardadores. La tutela y las curadurías generales se extienden, no sólo a los bienes, sino a las personas sometidas a ellas.

- Están sujetos a tutela los menores.
- Están sujetos a curaduría general los interdictos.

Para aplicar estas figuras se necesita la decisión de un juez en el caso de las personas que no pueden gobernarse por sí mismas, y en los otros casos, ellos pueden nombrar tutores o curadores.

En materia civil, es necesario comentar que los bienes materiales de las personas con discapacidad deben ser resguardados para evitar acciones que puedan ser calificadas de conflicto de interés, influencia indebida o abuso, u

otras que se constituyan en situaciones perjudiciales para la persona con discapacidad, entre las que pueden estar:

- a) Transferencias indebidas y prohibidas de bienes o derechos de su patrimonio a aquellas personas autorizadas para actuar como sus representantes o a terceros con los que mantenga o no vínculos de afectividad.
- b) Enajenaciones de bienes o derechos que, sin estar prohibidas por la legislación civil, sean manifiestamente perjudiciales para ella y beneficien a las personas nombradas anteriormente.
- c) Poderes especiales a terceros para realizar actos en su nombre, ocasionándole perjuicios injustificados o enriquecimiento injusto de aquéllos.



Para que las personas con discapacidad sean declaradas incapaces absolutas, bajo un enfoque de Derechos Humanos, esta persona debe ser examinada por varios profesionales especialistas en la materia a fin de determinar si en efecto, esa persona tiene limitaciones reales de expresión de su voluntad y en qué porcentaje, además se debe descartar el que esta persona no puede actuar a través de los diferentes medios de apoyo en todas las decisiones relativas a su vida.

DERECHOS EN MATERIA DE FAMILIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En materia familiar, los derechos de las niñas, niños y adolescentes y las personas con discapacidad están amparados por la Constitución y el Código Orgánico de la niñez y adolescencia. Entre los derechos que podríamos resaltar como información general están los siguientes:

Patria potestad

La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley. El reconocimiento posterior del hijo o hija da derecho al ejercicio de la patria potestad.

Tenencia

Cuando el Juez estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia a uno de ellos.

Derechos de Alimentos

El derecho a alimentos está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado.

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: alimentación, salud, educación, cuidado, vestuario, vivienda, transporte, rehabilitación y ayudas técnicas si el alimentante tiene algún tipo de discapacidad.

¿Quiénes están obligados?

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado, el juez ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren en condición discapacitante o con discapacidad, en su orden serán los abuelos, hermanos que hayan cumplido 21 años de edad y los tíos. La autoridad competente, en base al orden previsto regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión

alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.

El derecho de alimentos persiste aún cumplida la mayoría de edad en el caso de las personas con discapacidad cuando sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por la autoridad sanitaria nacional competente, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse.



Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad.

También los hijos están obligados a asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que requieran de ayuda, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos.

Visitas

Las personas con discapacidad ya sea alimentante y alimentado tienen derecho a visitas el cual se regula por resolución judicial.

En todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija.

Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor del hijo o la hija por causa de violencia física, psicológica o sexual, el juez podrá negar el régimen de visitas respecto del progenitor agresor o regular las visitas en forma dirigida, según la gravedad de la violencia. El juez considerará esta limitación cuando exista violencia intra - familiar.

DERECHOS EN MATERIA LABORAL

Los derechos en materia laboral para todas las personas sin distinción son inalienables e intransigibles, son irrenunciables, toda estipulación en contrario es nula, los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar oportuna y debida protección para la eficacia y respeto de los derechos del trabajador.

Las personas con discapacidad tienen derecho a la estabilidad laboral, a desempeñar su trabajo en un ambiente sano y seguro donde el empleador le provea de los insumos para su trabajo, a recibir una remuneración conforme la ley, a estar afiliado a la seguridad social, a tener días de descanso obligatorio, y goce de vacaciones anuales, tiene derecho a obtener permisos para atención médica sin que sea descontado de sus vacaciones, tiene derecho a acceder a ascensos y capacitación, a tener un trato cortés y de respeto.

En la Ley Orgánica de Discapacidades en su art. 48, se ha incluido la figura del sustituto en derechos del trabajo, que consiste que un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, pareja de unión de hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad a la persona con discapacidad severa, podrán formar parte del porcentaje de inclusión laboral.

A partir de esta figura, las personas que tienen a cargo el cuidado de personas con discapacidad severa, por su condición de cuidadora, tienen un régimen de tratamiento laboral especial que les permite atender el trabajo y el cuidado de la persona con discapacidad.

Las personas con discapacidad o su sustituto en caso de discapacidad severa, tienen derecho a una estabilidad laboral en entidades del sector público pese a que su relación de trabajo sea bajo un contrato de servicios ocasionales. Esto ha dictaminado la Corte Constitucional en su sentencia No. 258-15-sep, del año 2015, modificando parcialmente al art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

El contenido de la sentencia No. 258-15-sep, en su parte referente a personas discapacidad la resumimos a continuación:

Ley Orgánica del Servicio Público, art. 58.- Contratos de servicios ocasionales “.....la contratación del personal ocasional no podrá sobrepasar el 20% de la totalidad del personal de la entidad contratante....” se exceptúa de este porcentaje a las personas con discapacidad debidamente calificadas por la autoridad nacional de salud.

En casos de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios ocasionales, hasta por 12 meses adicionales. Salvo a las personas con discapacidad, debidamente calificadas por autoridad competente y puestos comprendidos en proyectos de inversión o escala del nivel jerárquico superior.

En caso de despido Intempestivo, tiene derecho a una indemnización justa y apegada las disposiciones legales.

Se produce el despido intempestivo cuando el empleador impide seguir laborando al trabajador sin justificación alguna, cuando se produce este despido, el empleador tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones económicas determinadas en la ley.

¿Sabías que?

En caso de despido intempestivo tienes derecho a Indemnizaciones laborales por discapacidad

En el caso de las personas con discapacidad o de las personas que tuvieran a cargo su manutención, adicionalmente a los valores establecidos por el art 188 del Código de Trabajo en general, la Ley Orgánica de Discapacidades en su art. 51, prevé el pago de 18 meses de la mejor remuneración y aplica en porcentajes de discapacidad desde el treinta por ciento (30%).

Derecho a la No Discriminación

La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio innecesario a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido y que contraviene el principio constitucional de igualdad y no discriminación, establecido en el Art. 11 Núm. 2. Esta práctica negativa hacia las personas con discapacidad insertas en el campo laboral, se evidencia de la siguiente manera:

1. Tratos despectivos hacia la persona con discapacidad o insultos reiterativos.
2. Asignación de actividades laborales no adaptadas a la situación del trabajador con discapacidad o extensiones de horarios.
3. Mal trato o trato diferenciado por compañeros de trabajo.

Derecho a La Seguridad Social

En el ámbito de la Seguridad Social, los derechos los trabajadores con discapacidad están amparados por el Código del Trabajo en igualdad de condiciones que cualquier persona, sin distinción ni exclusión.

Entre los derechos que podríamos resaltar como información general están los siguientes:

- Afiliación General Ordinaria
- Afiliación Voluntaria
- Jubilación por vejez
- Jubilación por discapacidad
- Pensión por invalidez



Afiliación General Ordinaria y Voluntaria

El derecho a la afiliación es irrenunciable según lo dispuesto en el Art. 34 de la Constitución y el Art. 4 del Código de Trabajo. El derecho a la Seguridad Social reconoce el seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, muerte y riesgos del trabajo.

Para obtener este seguro, los trabajadores amparados por el Código Laboral reconocerán el 20,60% de su salario, correspondiendo pagar el 11,15% al empleador y el 9,45% al trabajador y en el caso de los servidores públicos el 22.60 %, les corresponderá pagar el 11,15% al Estado y el 11,45% al trabajador.

En el caso de jubilación voluntaria el trabajador pagará el 17.60 % de la totalidad de sus ingresos.

Requisitos:

- Copia de cedula de identidad y papeleta del empleador y trabajador.
- Copia del contrato de trabajo debidamente legalizado en el Ministerio de Trabajo.
- Copia del comprobante del último pago de agua, luz o teléfono del empleador.

Jubilación

Jubilación especial por vejez: Las personas con discapacidad afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que acrediten trescientas (300 aportaciones) y sin límite de edad; tendrán derecho a una pensión que será igual al sesenta y ocho punto setenta y cinco por ciento (68.75%) del promedio de los cinco (5) años de mejor remuneración básica unificada de aportación en concordancia con la determinación de mínimos, máximos y ajustes periódicos que efectúe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En los casos de personas con

discapacidad intelectual tendrán derecho a la pensión jubilar cuando acrediten doscientas cuarenta (240) aportaciones – 20 años)

Las y los servidoras o servidores con discapacidad de las entidades y organismos públicos, que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por parte de su empleador, por una sola vez, cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio en una misma empresa, contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total; en base al salario básico establecido en el año 2015.

Jubilación por Invalidez: Se acreditará derecho a pensión de jubilación por incapacidad total y permanente en los siguientes casos:

- a) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en la actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de sesenta (60) imposiciones mensuales, de las cuales seis (6) como mínimo deberán ser inmediatamente previas a la incapacidad; y,
- b) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida dentro de los dos (2) años siguientes al cese en la actividad o al vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que el asegurado hubiere acumulado ciento veinte (120 – 10 años) imposiciones mensuales como mínimo, y no fuere beneficiario de otra pensión jubilar, salvo la de invalidez que proviniera del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio a causa de la misma contingencia.

Quien se invalidare en forma absoluta y permanente para todo trabajo sin acreditar derecho a jubilación por incapacidad total, tendrá derecho a una pensión asistencial por invalidez, de carácter no contributiva, en las condiciones previstas en el artículo 205 de la Ley de Seguridad Social, siempre que no estuviere amparado por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. Para efectos de este Seguro, se considerará inválido al asegurado que, por enfermedad o por alteración física o mental, se hallare incapacitado para procurarse por

medio de un trabajo proporcionado a su capacidad, fuerzas y formación teórica y práctica, una remuneración por lo menos equivalente a la mitad de la remuneración habitual que un trabajador sano y de condiciones análogas obtenga en la misma región.

Pensión por discapacidad permanente total o permanente absoluta: Las y los afiliados a quienes les sobrevenga una discapacidad permanente total o permanente absoluta tendrán derecho a la pensión por discapacidad sin requisito mínimo de aportaciones previas. Para el cálculo de la pensión se aplicarán los mínimos, máximos y ajustes periódicos que efectúe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación por invalidez.

Requisitos

Jubilación por Invalidez Inicial	Jubilación por Invalidez Definitiva
<ul style="list-style-type: none">• Solicitud de jubilación por invalidez (previa).• Original de la partida de nacimiento• Dos (2) copias de la cédula de ciudadanía, firmadas al pie.• Copia del certificado de Votación (menor de 65 años).	<p>Calificada la invalidez, el afiliado debe presentar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Solicitud de jubilación definitiva con certificado de cese por el último patrono (El formulario se lo obtiene ingresando al sitio web: iess.gov.ec/documentos/transparencia/formularios/FORMULARIO_solicitud_de_jubilacion_definitiva.pdf)• Copia de la cuenta bancaria activa.

Procedimiento

- Recepción de documentación.- En todas las Unidades Provinciales del Sistema de Pensiones y Direcciones Provinciales a Nivel Nacional.
- Precalificación.- Los asegurados que solicitaren pensión por invalidez, deberán sujetarse a los exámenes médicos que el IESS estime convenientes y a los tratamientos que se les prescribiere. El incumplimiento de este requisito causará el archivo del trámite o la suspensión del goce de la pensión, según el caso.

Montepío

Es la pensión que entrega el IESS a viudas, viudos, huérfanos o padres del afiliado que haya cumplido con el monto mínimo de 60 aportaciones correspondientes a 5 años de aportación o jubilados fallecidos.

Quienes pueden reclamar

- Viuda o viudo, que demuestre la convivencia mínima de dos años o que tengan hijos.
- Hijos menores de 18 años o personas con discapacidad que no se puedan valer por sí mismas.
- A falta de viuda, viudo o hijos, percibirá la madre o padre del causante que haya vivido a su cargo.

Requisitos

- Solicitud de montepío impresa de la página web del IESS: www.iess.gob.ec.
- Partida de defunción del asegurado.
- Partida de nacimiento y copia legible de la cédula de ciudadanía del fallecido.

- Partida de nacimiento y copia legible de la cédula de ciudadanía de la viuda con el estado civil actualizado.
- Certificado de votación (menores de 65 años)
- Certificado de no adeudar al IESS, a nombre del fallecido.
- Certificación bancaria de cuenta activa, o copia legible de la cuenta de ahorro o corriente, a nombre del beneficiario.

DERECHOS EN MATERIA TRIBUTARIA, DE LAS TARIFAS PREFERENCIALES, EXENCIONES ARANCELARIAS Y DEL REGIMEN TRIBUTARIO

Dependiendo del porcentaje de discapacidad, las personas con discapacidad tienen derechos y pueden acceder a ciertos beneficios tributarios. Los beneficios tributarios únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al treinta por ciento (30%), de conformidad con la Sentencia Constitucional que reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en el Registro Oficial en la Edición Constitucional No. 5 de martes 27 de junio de 2017.

Grado de Discapacidad	Porcentaje para aplicación del beneficio
Del 30% al 49%	60%
Del 50% al 74%	70%
Del 75% al 84%	80%
Del 85% al 100%	100%

Exoneraciones tributarias

Devolución del IVA.- prevista en el artículo 78 de la Ley Orgánica de Discapacidades, debe sustentarse en adquisiciones locales respaldadas en comprobantes de venta emitidos a partir del 26 de septiembre del 2012. En ningún caso estas solicitudes de devolución se fundamentarán en comprobantes de venta emitidos con anterioridad a la fecha indicada.

Exoneraciones de tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulaación.- Las personas con discapacidad se encuentran exentas del pago de las tasas y/o tarifas por servicios notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulaación, así como por la obtención de su pasaporte.

DERECHOS EN MATERIA PENAL

En caso de ser víctima

El Código Orgánico Integral Penal-COIP dispone que como víctima se tiene derecho a presentar acusación particular o denuncia según el tipo de delito.

En caso de denuncia se debe acudir a la Fiscalía, institución que ejercerá la acción penal pública cuando tenga los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada.

El ejercicio privado de la acción penal o acusación particular le corresponde únicamente a la víctima, mediante querrela, procede el ejercicio privado de la acción en los siguientes delitos:

1. Calumnia
2. Usurpación

3. Estupro

4. Lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.



Además la persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito, podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía, al personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito. La denuncia será pública, sin perjuicio de que los datos de identificación personal del denunciante, procesado o de la víctima, se guarden en reserva para su protección.

El Art. 11 del Código Orgánico Integral Penal determina los derechos en todo proceso penal que tendrán las víctimas de cualquier delito y estos son: proponer acusación particular, la reparación integral de los daños sufridos que incluye el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado, la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus familiares y sus testigos, a no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, incluida su versión, a tener un defensor público o privado antes y durante la investigación, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento así como a recibir asistencia especializada, a ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y aun cuando no haya intervenido en el proceso, del resultado final, en su domicilio si se lo conoce y a ser tratada en condiciones de igualdad, aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con su dignidad humana.

Como infractor la persona tendrá las siguientes garantías

Así mismo, las personas procesadas y privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos: Estos son: derecho al debido proceso respetando las garantías procesales, a la integridad física, psíquica, moral y sexual, se respetará este derecho durante los traslados, registros, requisas o cualquier otra actividad, a recibir información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión disponible en los centros de privación de libertad.

La persona privada de libertad tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su familia, tiene derecho a presentar quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de privación de libertad, a la o al juez de garantías penitenciarias y a recibir respuestas claras y oportunas, tiene derecho a ser informada en su propia lengua acerca de sus derechos, tiene derecho a la salud preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se considerarán las condiciones específicas de cada grupo de la población privada de libertad, derecho a una nutrición adecuada, tendrá derecho al acceso a agua potable en todo momento.

Las sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. No se podrán imponer sanciones que contravengan los derechos humanos.

Delitos contra las personas

Las personas con discapacidad y sus familias deben identificar en la siguiente tabla los principales delitos contra las personas, ya sea como víctimas o infractores, pues de esta manera podrá conocer a dónde acudir o que esperar con el cometimiento de cualquiera de estos delitos:

DELITO	ART. COIP	¿QUE ES?	SANCION EN CASO DE SER INFRACTOR	QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA?
Trata de Personas	Arts. 91, 92	La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con pena privativa de libertad de 13a 16 años. 2. Con pena de 16 a 19 años, si la infracción recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria 3. Con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, si con ocasión de la trata de personas, la víctima ha sufrido enfermedades o daños psicológicos o físicos graves o de carácter irreversible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia en el caso de que exista.
Explotación Sexual y Pornografía	Art. 100,	Explotación.- La persona que, en beneficio propio o de terceros, venda, preste, aproveche o dé en intercambio a otra para ejecutar uno o más actos de naturaleza sexual	Será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas de grupos de atención prioritaria la pena será de 16 a 19 años.	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia en el caso de que exista.
	Art. 101	Prostitución forzada.- La persona que obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra en contra de su voluntad para realizar uno o más actos de naturaleza sexual.	Será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia en el caso de que exista.

DELITO	ART. COIP	¿QUE ES?	SANCION EN CASO DE SER INFRACTOR	QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA?
Explotación Sexual y Pornografía	Art. 102	Turismo sexual. - La persona que organice, promueva, ofrezca, brinde, traslade, reclute, adquiera o contrate actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual	<p>Será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años.</p> <p>Si las víctimas se encuentran en alguno de los siguientes casos, la pena será de diez a trece años:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si son niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, 2. Cuando se utilice violencia, amenaza o intimidación. 3. La persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia en el caso de que exista.
	Art. 103	Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. -La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual.	<p>Será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años.</p> <p>Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena de 16 a 19 años.</p> <p>Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, maestro, o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena de 22 a 26 años.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia en el caso de que exista.

DELITO	ART. COIP	¿QUE ES?	SANCION EN CASO DE SER INFRACTOR	QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA?
Explotación Sexual y Pornografía	Art. 104	Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.- La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 10a 13 años.	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia en el caso de que exista.
Asesinato, homicidio, feminicidio	Art. 144	Homicidio.- La persona que mate a otra.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.
	Art. 145	Homicidio culposo.- La persona que por culpa mate a otra.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.

DELITO	ART. COIP	¿QUE ES?	SANCION EN CASO DE SER INFRACTOR	QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA?
Asesinato, homicidio, feminicidio	Art. 146	Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía más cercana, a denunciar el hecho.
Asesinato, homicidio, feminicidio	Art. 140	Asesinato.- La persona que mate a otra, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: <ol style="list-style-type: none"> 1. A sabiendas 2. Colocar a la víctima en indefensión, 3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio 4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 5. Utilizar medios capaces de causar grandes estragos. 6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 7. Preparar, u ocultar otra infracción. 8. Asegurar la impunidad de otra infracción. 9. Si se produce durante concentraciones masivas, evento deportivo o calamidad pública. 10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial 	Será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.

DELITO	ART. COIP	¿QUE ES?	SANCION EN CASO DE SER INFRACTOR	QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA?
Asesinato, homicidio, feminicidio	Art. 141	Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.
	Art. 143	Sicariato.- La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.
Aborto	Art. 150	<p>Aborto no punible.- El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, no será punible en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. 	<p>Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará como tentativa.</p> <p>Aborto consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena de 1 a 3 años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho.

DELITO	ART. COIP	¿QUE ES?	SANCION EN CASO DE SER INFRACTOR	QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA?
Tortura	Art. 151	Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya físico o psíquico o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años.	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.
Lesiones	Art. 152	<p>Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días 2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, 3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa días, 4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no supere los noventa días, 5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable. 	<p>Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.</p> <p>Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.</p> <p>Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años.</p> <p>No serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas por profesionales de la salud en cumplimiento del principio de necesidad que precautele la salud del paciente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia. • Asistir al Centro de Salud Pública más cercano.

DELITO	ART. COIP	¿QUE ES?	SANCION EN CASO DE SER INFRACTOR	QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA?
Abandono	Art. 153	Abandono de persona.- La persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su vida o integridad física.	Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Las lesiones producto del abandono de persona, se sancionarán con las mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en un tercio. Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de 16 a 19 años.	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al Ecu 911 y comunicar la emergencia.
Violencia contra la Mujer o miembros del grupo familiar	Art. 155	Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.		<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.
	Art. 156	Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones.	Será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.	
	Art. 157	Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Si se afecta de manera moderada el funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social será sancionada con pena de 6 meses a 1 año. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.	

DELITO	ART. COIP	¿QUE ES?	SANCION EN CASO DE SER INFRACTOR	QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA?
Violencia contra la Mujer o miembros del grupo familiar	Art. 158	Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas.	Será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.	<ul style="list-style-type: none"> • No bañarse si se va a denunciar inmediatamente después de la acción cometida. • Acercarse al centro de Salud más cercano • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho lo antes posible. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.
Delitos contra Integridad Sexual y Reproducción	Art. 166	Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaleciendo de situación de autoridad.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años	<ul style="list-style-type: none"> • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho lo antes posible. • No bañarse si se va a denunciar inmediatamente después de la acción cometida. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.

DELITO	ART. COIP	¿QUE ES?	SANCION EN CASO DE SER INFRACTOR	QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA?
Delitos contra Integridad Sexual y Reproducción	Art. 170	<p>Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal.</p> <p>Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal.</p>	Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.	<ul style="list-style-type: none"> • No bañarse si se va a denunciar inmediatamente después de la acción cometida. • Acercarse al centro de Salud más cercano • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho lo antes posible. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.
	Art. 171	<p>Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo.</p>	<p>Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años.</p> <p>Será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 	<ul style="list-style-type: none"> • No bañarse si se va a denunciar inmediatamente después de la acción cometida. • Acercarse al centro de Salud más cercano • Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho lo antes posible. • Llamar al ECU 911 y comunicar la emergencia.

DELITO	ART. COIP	¿QUE ES?	SANCION EN CASO DE SER INFRACTOR	QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA?
Delitos de discriminación y actos de odio	Art. 176	Discriminación. -La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.	Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho.
	Art. 177	Actos de Odio. - La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH.	Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones	Acercarse a la Fiscalía o Unidad de Policía Nacional más cercana, a denunciar el hecho.

DERECHOS EN MATERIA DE TRÁNSITO

Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. Las personas con discapacidad tendrán iguales derechos y obligaciones que las demás personas y en el caso de incurrir en procesos de tránsito conforme el parte Policial, en el caso de contravenciones tendrán derecho al arresto domiciliario.

Los usuarios de las vías están obligados a obedecer las normativas, reglamentaciones viales, indicaciones del agente de tránsito y señales de tránsito que establezcan una obligación o prohibición, como el adecuado uso de puentes peatonales o de las líneas cebras en cruces peatonales.

Contravenciones

Las contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy graves, y se clasifican a su vez en leves de primera, segunda y tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera clase.

Contravenciones del Conductor

- La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada, suspendida temporal o definitivamente. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según las características del vehículo
- La persona que conduzca en exceso de velocidad, velocidad permitida 40km en la ciudad y 90 km fuera de la ciudad. No respetar las leyes y agentes de tránsito
- Conducir con llantas lisas.
- Exceso de pasajeros

Art. 123 COIP.- Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito son:

- a) Reclusión;
- b) Prisión;
- c) Multa
- d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia;
- e) Reducción de puntos;
- f) Trabajos comunitarios.

Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad con lo establecido en cada tipo penal. En todos los casos de delitos y contravenciones de tránsito se condenará obligatoriamente al infractor con la reducción de puntos en la licencia de conducir de conformidad con la siguiente tabla:

CONTRAVENCIÓN	REDUCCIÓN DE PUNTOS
Leves de primera clase	1,5
Leves de segunda clase	3
Leves de tercera clase	4,5
Graves de primera clase	6
Graves de segunda clase	7,5
Graves de tercera clase	9
Muy grave	10
Delitos	11 - 30

DERECHOS DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO, AL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO

La accesibilidad de las personas con discapacidad es uno de los derechos fundamentales para su inclusión, ya que la accesibilidad a diferentes sitios les permitirá una interacción presencial importante en los ámbitos de salud, educación, laboral, recreación, entre otros.

Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a todos los espacios públicos y a que el Estado y entidades privadas, les otorgue las facilidades de infraestructura accesible de acuerdo a sus necesidades.

El transporte público y privado, sea aéreo, marítimo, fluvial o terrestre, tiene obligación de brindar servicios de transporte y de adoptar las medidas necesarias para el acceso, seguridad, comodidad y tranquilidad de la persona con discapacidad que requiere sus servicios; y, a respetar las tarifas preferenciales de menor costo del servicio, que debe pagar la persona con discapacidad.

Las personas con discapacidad pueden exigir el cumplimiento de estos derechos, a las autoridades administrativas o judiciales.

DERECHOS EN MATERIA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

Los derechos del consumidor son transversales; es decir, aplicables en todos los ámbitos, ya que todo lo que se compre o reciba como bien o servicio, deben cumplir estándares o respetar derechos, y esos derechos debemos conocerlos, enunciando los más importantes:

- Derecho a seguir acciones administrativas o judiciales para reclamar un mal servicio o producto;

- Derecho a recibir indemnización de daños y perjuicios por la mala calidad del servicio o producto;
- Derecho a una educación de consumo responsable de los productos que se adquiere;
- Derecho contra la publicidad engañosa o mentirosa sobre la calidad de un bien o servicio;
- Derecho a que los proveedores públicos y privados oferten bienes competitivos y de calidad; y, derecho a elegirlos.
- Derecho a recibir bienes y servicios públicos de calidad (Entre lo que está el alumbrado público, el transporte público, buena calidad de calles, aceras, parques, etc.
- Derecho a una información, clara, adecuada, oportuna sobre los bienes o servicios. (Especialmente información de que su consumo cause posibles daños a la salud.)
- Derecho a un trato transparente, equitativo, no discriminatorio o abusivo de parte de los proveedores de los bienes y servicios especialmente en lo que se refiere a precio, cantidad, calidad, peso y medida de los bienes o servicios.

DERECHOS EN MATERIA DE SALUD

El Estado garantiza el derecho a la salud, de las personas con discapacidad, a una atención sin exclusión o discriminación en centros de salud públicos o privados, la atención abarca, la prevención, atención especializada, permanente, prioritaria, rehabilitación, habilitación.

La persona con discapacidad, sujetándose a ciertas regulaciones del Ministerio de Salud, entre las que está el acceder a una calificación y carnet de discapacidad, tiene derecho a medicamentos, insumos, ayudas técnicas, a medicamentos e insumos gratuitos. Las órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas que remplacen o compensen las

deficiencias anatómicas o funcionales de las personas con discapacidad serán entregadas gratuitamente a través de la autoridad sanitaria y de las regulaciones que se emitan para ese efecto.

En este contexto es importante dos situaciones en la descripción de los derechos de salud de las personas con discapacidad; la primera, que es un derecho de salud acceder a una calificación y carnet de discapacidad ; y, dos que ninguna entidad de salud podrá negar la atención médica oportuna y de calidad a una persona con discapacidad.

Dentro de los derechos de salud además, está el derecho a acceder a seguros médicos y de vida, lo que es regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

En resumen se enuncian otros derechos para información:

- Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;
- Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos;
- Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna;
- Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le entregue.
- Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito;

- Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la personas y para la salud pública;
- Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten;
- Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos;
- Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida
- No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Las personas con discapacidad, conforme la Constitución de la República del Ecuador, tienen amplias garantías y derechos que les permite acceder, permanecer y culminar dentro del sistema educativo sus estudios en todos los niveles, incluida la educación superior. Ya sea asistiendo a clases en establecimientos educativos especializados o en establecimientos de educación no especializada, según sea el caso.

La educación parte del principio de ser inclusiva, considerando las adaptaciones curriculares, accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje.

Las políticas que emita la autoridad educativa son de cumplimiento obligatorio para las entidades educativas y bajo ningún concepto negaran el acceso a una persona con discapacidad, salvo que no fuere posible su inclusión conforme una evaluación de la emisora de las políticas públicas en materia de educación, que es el Ministerio de Educación o la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación.

A más del derecho de acceder a una educación, las personas con discapacidad tienen derecho a exigir se cumplan las políticas de inclusión en todo ámbito, iniciando por una inclusión de aceptación amigable, lo que debe ser parte de la formación de los estudiantes que compartirán e incluirán a las personas con discapacidad.

Las adaptaciones curriculares y de espacios físicos, son mandatos de la autoridad educativa a través de sus políticas, pero la integración emocional al diario vivir de la comunidad educativa, es un trabajo ético y particular de las autoridades de las unidades educativas, permitiendo así una inclusión efectiva y amable no solo a la educación sino a la convivencia e interacción de unos con otros.

BIBLIOGRAFÍA

- Constitución de la Republica del Ecuador.
- Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (2014), Ley Orgánica de Discapacidades (2012), Ley orgánica de la niñez y adolescencia, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
- Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de Procesos, Código Civil. Código Laboral, Código Tributario
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad
- 100 Reglas de Brasilia.
- Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad en la Función Judicial.
- Ley Orgánica de Salud
- Ley Orgánica de Educación Intercultural
- Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.

- Código del Trabajo
- Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento
- **Páginas Web Institucionales de:**
 - Ministerio del Interior
 - Policía Nacional
 - Policía Judicial
 - Policía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes- DINAPEN.
 - Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
 - Defensoría del Pueblo
 - Defensoría Pública
 - Consejo de la Judicatura
 - Fiscalía General del Estado



CONSEJO NACIONAL
PARA LA IGUALDAD
DE DISCAPACIDADES



Ministerio
de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos



Hacemos de la justicia una práctica diaria

www.consejodiscapacidades.gob.ec

Dir: Avenida 10 de Agosto N37-193 entre Villalengua y Carondelet

Telf: (593-2) 2433-860 / 2459-243 / 2273-042 Fax: ext. 134

Quito - Ecuador